

# Egipto, el golpe de Estado y las revoluciones árabes<sup>1</sup>

Santiago Alba Rico

El 25 de marzo de 2014 527 miembros de los Hermanos Musulmanes y partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi fueron condenados a muerte en un proceso sumarísimo denunciado por organizaciones de DDHH y gobiernos internacionales como “una burla a la justicia”. Dos semanas antes, en una decisión a la que se sumarían Arabia Saudí y los Emiratos poco días más tarde, el gobierno egipcio declaraba “organización terrorista” a la cofradía islamista, que hasta el 30 de junio del 2013 había gobernado el país tras obtener la victoria en sucesivas elecciones legislativas y presidenciales. Una semana después, el general Abdelfath Sisi, artífice del golpe de Estado del 2 de julio, dimitía de su cargo como ministro de Defensa y aceptaba, “por mandato del pueblo”, presentar su candidatura a las elecciones del próximo mes de mayo, donde obtendrá una victoria segura. Tras ocho meses de matanzas, represión y tortura, en medio de una contestación ininterrumpida que incluye ya otras fuerzas de oposición, la guerra a muerte contra los Hermanos Musulmanes y la candidatura del espadón Sisi a la presidencia de Egipto cierran en apariencia un intenso ciclo revolucionario, imponiendo una nueva versión, aún más represiva, de la dictadura militar de Hosni Mubarak, derrocado el 11 de febrero de 2011 por una intifada popular que despertó enormes esperanzas. Tras un brevísimo interin de un año, los militares recuperan las riendas del poder -que en realidad nunca habían perdido- y restablecen la dura normalidad, y ello en un contexto de inestabilidad regional en el que el régimen militar egipcio, en plaza desde 1952, está destinado a jugar, como siempre, un papel decisivo.

## Un poco de historia

Para entender qué ha pasado y qué está pasando -y quizás qué va a pasar- es necesario recordar algunos datos básicos. Tras la segunda guerra mundial, Arabia Saudí y Egipto se convirtieron en los dos pivotes de la atención geoestratégica en el Próximo Oriente y en la región árabe en general, y ello en el marco de una recomposición

---

<sup>1</sup> Este artículo forma parte del *Anuario de Movimientos Sociales 2013*, publicado por Fundación Betiko en Enero 2014. Disponible online en: [www.fundacionbetiko.org](http://www.fundacionbetiko.org)

“imperialista” en la que dos nuevas fuerzas exteriores vinieron a sustituir a las hasta entonces dominantes: el imperio otomano e Inglaterra (y Francia), en efecto, fueron desplazadas por Israel y EEUU como vectores de poder en torno a los cuales se distribuyen desde entonces las alianzas y las resistencias. Como sabemos, en febrero de 1945 los acuerdos del Quincey entre Abdel Aziz Ibn Saud y Roosevelt concedieron a los EEUU, virtuales vencedores de la guerra mundial, el control de los mayores recursos energéticos del mundo mientras que Arabia Saudí obtenía a cambio legitimidad e influencia regional, así como el permiso para difundir en todo el mundo musulmán suní la doctrina wahabista, una corriente hasta entonces muy minoritaria del Islam que había nacido a mediados del siglo XVIII en la península arábiga y cuyo rigorismo fanático resultaba más bien disuasorio para los pueblos de la región. Gracias al dinero del petróleo, Arabia Saudí, que nunca ayudó al desarrollo económico de la zona<sup>1</sup>, se convirtió en el más fiel aliado de EEUU y en el más eficaz difusor de ideología del mundo, convirtiendo la versión más sectaria del islam, según la expresión de Hamadi Redissi<sup>2</sup>, en “una nueva ortodoxia” -una de cuyas ramas naturales y díscolas es hoy Al-Qaeda. Casi al mismo tiempo, en 1948, otro acontecimiento decisivo vino a marcar el destino de la región. Me refiero a la fundación violenta y artificial del Estado de Israel, un proyecto colonial europeo -en plena descolonización- que ha sido siempre, y sigue siendo, la mayor fuente de conflicto e inestabilidad planetaria, el diminuto pespunte por donde se ha quebrado siempre y se seguirá quebrando la paz mundial. Si Arabia Saudí es desde 1945 el aliado energético del proyecto imperialista estadounidense, desde 1967 Israel se transforma en su aliado “ideológico”. Uno y otro -Arabia saudí e Israel- no han dejado de ser desde entonces los mayores obstáculos en el camino de la liberación de los pueblos árabes y de la democratización de la región.

Toda la política occidental en la zona ha girado siempre y sigue girando en torno a la defensa de estos dos pilares: el petróleo del Golfo y el Estado colonialista de Israel. Frente al wahabismo petrolero y el sionismo israelí, apoyados en y por EEUU, en los años 50 y 60 surgieron en el mundo árabe una serie de proyectos soberanistas que impugnaban al mismo tiempo las divisiones geográficas heredadas de los acuerdos Sykes-Picot y el imperialismo occidental. De ambición panarabista, forjados en torno al nasserismo egipcio y al baazismo sirio-iraquí e inspirados en un pensamiento esencialista muy poco tolerante con las minorías étnicas y lingüísticas de la región, estos movimientos se sostuvieron al amparo de la Guerra Fría, minados por sus propias divisiones, las derrotas frente a Israel y el autoritarismo creciente de sus gobiernos. Su influencia, con especificidades locales y rencillas internas, se extendió un poco por todas partes: no sólo en Egipto, Siria e Iraq sino también en Yemen, Túnez, Argelia y Libia. La derrota de la Unión Soviética en 1989 y el empuje del neoliberalismo acabaron por enterrar sus potencialidades socialistas dejando intacto su aparato dictatorial. Para entonces, el apoyo de la CIA a los muyahidín afganos contra la URSS y la revolución anti-estadounidense en Irán, casi contemporáneos, habían renovado el

impulso islamista de manera contradictoria, cambiando las fuerzas pero no la relación entre ellas sobre el tablero geopolítico regional. Mientras occidente jugaba al aprendizaje de brujo sosteniendo los regímenes más reaccionarios en defensa de sus intereses, el anti-imperialismo se desplazaba irremediamente desde la izquierda panarabista a la derecha panislamista. La infame invasión de Iraq por EEUU en 2003 completó paradójicamente este cuadro, entregando un país destruido y dividido al enemigo iraní, que es hoy quien realmente determina la política del presidente Al-Maliki y de su partido chií gobernante. Podemos decir (mediante una hipérbole que, en todo caso, da cuenta de los cambios producidos tras el fin de la Guerra Fría) que China y la URSS, anti-imperialistas contendientes de la época, dejaron paso a Al-Qaeda e Irán, fuerzas islamistas anti-imperialistas -una suní y otra chií- reñidas entre sí y que se disputan hoy, como Stalin y Mao lo hicieron en la izquierda en otro tiempo, la influencia del campo islamista anti-occidental.

Lo cierto es que el núcleo político y simbólico de esta resistencia nacionalista panárabe al proyecto económico-ideológico de Arabia Saudí e Israelí fue, sin duda, el Egipto de Nasser. El golpe de Estado de los Oficiales Libres contra la monarquía en 1952 encendió todas las alarmas en las cancillerías occidentales, especialmente en Francia e Inglaterra, ex-potencias coloniales que querían seguir manteniendo el control en la zona y que en 1956, en alianza con el ejército sionista, desencadenaron una agresión militar contra el nuevo poder en El Cairo (agresión, por cierto, frenada por las presiones convergentes de la URSS y de EEUU). Gamal Abdel Nasser (1918-1970) era un joven oficial de extracción social modesta, muy carismático, que encabezó el golpe contra el rey Farouk y que, presidente desde 1953, nacionalizó el Canal de Suez, emprendió una modesta reforma agraria y, empujado por Occidente, acabó dependiendo de la ayuda económica y militar soviética. Uno de los ejes de su política fue siempre la defensa de Palestina; comandante en la primera guerra árabo-israelí de 1948, fue el gran referente ideológico y militar en 1956 y en 1967, fecha de la gran derrota árabe y egipcia frente a Israel. Líder popular de un gran movimiento pan-árabe que cuestionaba al mismo tiempo el conservadurismo teocrático de Arabia Saudí y el racismo colonial del proyecto sionista, aliado además de la Unión Soviética y símbolo del movimiento de Bandung, Nasser era claramente un obstáculo en las ambiciones estadounidenses en la región. EEUU, en efecto, aprovechó su temprana muerte en 1970 para presionar a su sucesor, Anwar el-Sadat (1918-1981) y atraer Egipto a la órbita occidental. Sadat, oficial del ejército y miembro fundador del movimiento de los Oficiales Libres, hombre próximo -o más próximo- a los Hermanos Musulmanes, se distanció cada vez más de la línea ideológica de Nasser, manteniendo igualmente intacto el poder dictatorial del ejército. El resultado fue doble; por un lado la llamada “infitah” o “apertura”, abrió Egipto a los mercados y empresas occidentales sin hacer concesiones políticas; por otro, la firma de los acuerdos de Camp David en 1978 supuso el reconocimiento oficial del Estado de Israel, lo que fue vivido como una enorme traición por parte de la opinión

pública árabe. Este doble viraje, que convirtió a Sadat en blanco de los mismos islamistas radicales que había utilizado contra nasseristas e izquierdistas y que lo asesinaron en 1981, convirtió Egipto en pieza central del orden geoestratégico diseñado por EEUU en favor, al mismo tiempo, de su seguridad energética y del Estado de Israel<sup>3</sup>.

Desde 1952, el ejército es la columna vertebral del Estado egipcio. Lo fue con Nasser y lo fue con Sadat y siguió siéndolo con Hosni Mubarak (nacido en 1928), general laureado y presidente desde 1981 hasta su derrocamiento en febrero de 2011. A partir de Sadat ese ejército, que controla todas las instituciones y gestiona hasta el 60% del PIB del país, se convirtió además en el niño mimado de los EEUU. Como es sabido, con 1.500 millones de dólares anuales y superado sólo por Israel, Egipto es el segundo receptor mundial de ayuda económica y militar estadounidense, ayuda sólo parcialmente reducida tras el golpe de Estado del general Sisi en julio de 2013, del que nos ocuparemos más adelante.

### **Las revoluciones árabes**

A finales del año 2010, un incidente trágico pero menor, ya mitológico, desencadenó el “deshielo” de la única zona del mundo que se había mantenido interesadamente fosilizada desde la 2ª guerra mundial (quizás, más atrás, desde la disolución del Imperio otomano). En una ciudad del interior de Túnez, un vendedor ambulante humillado por la policía, Mohamed Bouazizi, se prendió fuego delante del palacio de gobierno de la ciudad y su muerte provocó un levantamiento popular que derrocó al dictador Ben Alí para sacudir inmediatamente toda la región<sup>1</sup>. El mundo árabe volvía a la “corriente central” de la historia en el momento más inoportuno, a contracorriente de los retrocesos democráticos acaecidos en todo el mundo tras el 11-S y en el marco de la crisis económica global. Cuando no se esperaba de él sino sueño o fanatismo religioso -las dos respuestas trabajadas durante décadas por las dictaduras locales y las fuerzas neocoloniales-, los árabes alzaban su voz, en efecto, para reclamar democracia y dignidad, poniendo así en cuestión un lúgubre statu quo, una “estabilidad” terrorífica que nadie quería en realidad alterar. Bajo ella, como atrapados en un feroz cepo para osos, los pueblos árabes sufrían inmovilizados, ignorados y despreciados.

Ya se tratara de falsas repúblicas, teocracias petroleras o monarquíasseudoparlamentarias y con independencia del perfil social y económico de las distintas sociedades, todas las poblaciones del mundo árabe compartían antes del 14 de enero de 2011, fecha del derrocamiento del dictador Ben Alí, un rasgo común: estaban todas ellas sometidas a dictaduras más o menos totalitarias gestionadas por oligarquías diminutas que reproducían su poder a través de prácticas mafiosas y brutal represión policial, acompañadas en la mayoría de los casos de unos niveles de miseria material y vital

ignominiosos<sup>2</sup>. Todos estos gobiernos eran o aliados de occidente o funcionales a sus diversificados intereses en la zona: gas, petróleo, política migratoria, sostenimiento de Israel, guerra “antiterrorista”. Ninguno de ellos constituía un obstáculo mayor en el camino del control imperialista de la región, como lo demuestran las muchas vacilaciones de EEUU y la UE antes de abandonar a Ben Ali en Túnez y a Hosni Mubarak en Egipto. O como lo prueban también el apoyo inicial al presidente Salih en Yemen y el apoyo incondicional a la familia Khalifa en Bahrein, al rey Abdalah en Jordania o a Mohamed VI y a Buteflika en Marruecos y Argelia, países éstos últimos donde las protestas fueron reprimidas en embrión ante el silencio generalizado. Por no hablar, claro, de Arabia Saudí, propiedad de la familia Saud, cuyos soldados irrumpieron en Bahrein en marzo de 2011 para reprimir las justas demandas de los bahreiníes antes de que llegasen hasta Riad y pusieran en peligro las fuentes petrolíferas fundamentales de los EEUU<sup>3</sup>.

La noticia de la toma de la Bastilla en julio de 1789 tardó mes y medio en llegar a Haití, donde alimentó la primera guerra de independencia de América Latina. A principios del siglo XXI, gracias a las nuevas tecnologías, las noticias de la revuelta tunecina comenzada a finales de diciembre del año 2010 repercutieron inmediatamente no sólo en la ciudad de al lado, en la que se padecían condiciones de vida idénticas, sino también en todos los países vecinos, donde las poblaciones se volvían conscientes de pronto -al mismo tiempo- de sus angosturas y de su poder. La llamada Primavera Árabe tuvo una clara dimensión emulativa e incluso competitiva: podemos decir, medio en broma medio en serio, por ejemplo, que ningún egipcio podía permitir que los tunecinos fuesen capaces de llegar más lejos que ellos. Esta “rivalidad revolucionaria”, como la llamaba el periodista Fahem Boukadous<sup>4</sup>, pone de manifiesto algo que incluso algunos sectores de la izquierda occidental han preferido ignorar: la existencia de un espacio árabe común, inscrito a su vez en la falla tectónica de la crisis capitalista global, en el que lo natural, lo normal, lo inevitable era que las mismas causas produjeran los mismos efectos.

Esta emulación y rivalidad revolucionaria en un espacio extraordinariamente sensible que comparte rasgos comunes negativos explica no sólo la espontaneidad del ímpetu inicial sino también la generalización, a partir del caso tunecino, de un mismo modelo de rebelión popular. Es fácil encontrar afinidades socio-económicas entre Túnez y Egipto y, sin embargo, podemos detectar esta misma “comunicación” global (este poner en común estrategias y respuestas) en lugares tan distantes como el Yemen, con toda su complejidad tribal, o en Bahrein, con uno de los ingresos per cápita más altos del mundo árabe. Basten estas dos citas como ejemplo. Abdulghani al-Iryani, un analista político yemení, escribía en marzo de 2011: “Nunca hemos tenido verdaderas movilizaciones callejeras... Antes de Túnez la oposición hizo una manifestación de 200 personas. Después de Túnez fueron miles. Después de Egipto se convirtió en una avalancha. Hay una nueva valoración del poder colectivo. Lo que no pudo hacer el

establishment político formal, juntar a la gente, lo logró la protesta de la juventud”<sup>5</sup>. Por su parte, un testigo bahreiní escribía en las mismas fechas desde la Plaza de la Perla, destruida poco después: “Tras los primeros enfrentamientos y las primeras violencias, la vieja dirigencia chií ha sido descabalgada y desautorizada por una nueva generación de protagonistas: los jóvenes y las mujeres. Han sabido tomar en sus manos la organización de la lucha política con métodos absolutamente pacíficos y de masa, una organización capilar y objetivos y consignas totalmente claros y transparentes: libertad y democracia”<sup>6</sup>. Ese mismo modelo, por cierto, tendrá sus réplicas sísmicas en el mediterráneo europeo, donde el movimiento 15-M español, iniciado en mayo de 2011, prolongó el mismo horizonte de protestas frente a un nitham (régimen) encarnado, pero no agotado, en tiranos individuales. Más tarde las ondulaciones sísmicas, con sus innegables especificidades locales, se extendieron a Atenas, a Nueva York, a Estambul, a Brasil, a los Balcanes, a Ucrania.

Hay que partir, pues, de esta unidad negativa del mundo árabe para comprender la efervescencia de estos últimos años. La situación general había sido ya expuesta en abril de 2005 en el informe encargado por el PNUD a un grupo de intelectuales árabes: “De acuerdo con los estándares del siglo XXI, los países árabes no han resuelto las aspiraciones de desarrollo del pueblo árabe, la seguridad y la liberación, a pesar de las diversidades entre un país y otro a este respecto. De hecho, hay un consenso casi completo en torno a la existencia de graves carencias en el mundo árabe, y la convicción de que éstas se sitúan específicamente en la esfera política”. Corrupción, clientelismo mafioso, parcialidad de la justicia, tribunales de excepción, violencia contra la “sociedad civil”, desigualdad económica, el informe incluía también una denuncia de la ocupación de Palestina e Iraq como obstáculos decisivos para la democratización de la zona: “Tras dismantelar el antiguo Estado, las autoridades de Estados Unidos al mando han dado pocos progresos a la hora de construir uno nuevo”. Era una forma cortés de aludir al enorme esfuerzo -al contrario- que EEUU y la UE han hecho en esta zona del mundo para impedir la democracia. Tras los atentados del 11-S y la invasión de Iraq, la administración Bush había comprendido la necesidad de hacer algunas concesiones que maquillaran los regímenes amigos sin cuestionar su poder o -como gustan decir los bombardeadores- su “estabilidad”. Las reformas constitucionales en Túnez y Egipto, las elecciones familiares en Arabia Saudí y los pomposos y perversos comicios en Iraq, junto a las manifestaciones masivas en Beirut, llevaron a algunos propagandistas a hablar en 2005 de una “primavera árabe”. El informe del PNUD venía a corregir esta visión soñadora para hablar con aspereza de “un agujero negro” y “una catástrofe inminente” asociada a una “explosión social” que podía, según sus previsiones, provocar “una guerra civil”. Sus propuestas y su lenguaje, en todo caso, se ceñían muy claramente a los límites de las reformas liberales y a los anhelos de una “buena gobernanza” concertada entre los Estados árabes y sus poblaciones.



En ese mismo mes de abril de 2005, sin embargo, el analista de origen libanés Gilbert Achcar veía con toda claridad la ilusión fraudulenta de esta primera “primavera árabe”, tomaba distancias frente al informe del PNUD y anticipaba una sacudida que hoy, ocho años más tarde, nos resulta sorprendentemente natural: “Un estudio libre de toda restricción institucional concluiría más bien en la necesidad de una unión de las fuerzas democráticas con el fin de imponer desde "abajo" cambios radicales, que serán menos violentos en la medida en que sean masivos, como lo ha demostrado ampliamente la historia y como también lo confirma la actualidad reciente. Además, en esta parte del mundo donde subsisten numerosos Estados patrimoniales, en los cuales todavía las familias reinantes se apropian de una parte considerable de los recursos nacionales, agrícolas y mineros, no podría haber consolidación de la democracia sin una importante redistribución de la propiedad y de los ingresos. Por eso parece mucho más ilusorio instaurar de manera duradera las libertades y la democracia por medio de una acción concertada con una parte de las clases dirigentes en el mundo árabe actual que, mucho antes, en las monarquías absolutas europeas o, hace poco, en las dictaduras burocráticas de Europa central y oriental”<sup>7</sup>.

Así ocurrió. El informe de 2005 del PNUD había definido negativamente la unidad del mundo árabe, que desde hacía décadas aparecía fragmentado, desordenado, difícil de integrar en cualquier forma de descripción homogénea: ahora el concepto de “dictadura” venía a vincular orgánicamente ampulosas monarquías teocráticas con pseudo-repúblicas laicas en el marco de una frustración política, cultural y vital al mismo tiempo panárabe y pandémica. Las reflexiones de Achcar dejaban claro, por su parte, que la democratización de las dictaduras árabes, en las que política y economía se fundían inextricablemente, implicaba necesariamente una ruptura institucional revolucionaria y una redistribución social de los recursos. No se podía negociar nada con los regímenes; había que derrocarlos.

Ahora -abril de 2014- cuando las luchas de los pueblos contra los regímenes se han enredado con luchas entre los regímenes e incluso luchas entre los pueblos mismos, y la agonía siria y el golpe egipcio parecen enterrar toda esperanza, es fácil olvidar esa situación inicial resumida en un grito común repetido en 2011 desde Marruecos a Bahrein: “el pueblo quiere tumbar el régimen”. El derrocamiento de las dictaduras, con independencia de sus historias locales y sus alineamientos ideológicos, era la exigencia común y natural de pueblos sometidos a males muy semejantes. A veces desde la izquierda, se plantea la cuestión suspicaz de por qué estas revueltas y revoluciones sólo alcanzaron su propósito -la caída del dictador- en los regímenes considerados de un modo bastante arbitrario “laicos” y “republicanos”, sugiriendo así una mano negra conspiradora. Con ello no sólo se olvida la diferencia entre estos regímenes (Argelia, por ejemplo, apenas fue rozado) sino también las protestas, ignoradas por los medios hegemónicos y poco atendidas por los alternativos, que arañaron, y siguen arañando, las monarquías del Golfo: Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos, desde luego Bahrein, e incluso -

del lado “enemigo” chií- Irán. En todo caso, la diferencia innegable de intensidad y resultado tiene una fácil explicación. Los regímenes que llamamos “laicos” y “republicanos” (Túnez, Libia, Egipto, Siria, Yemen) procedían todos, no obstante su más o menos reciente y más o menos profunda integración en la globalización capitalista, del campo “resistente” del panarabismo nacionalista, cuyas políticas educativas beneficiaron desde los años 60 a miles y miles de jóvenes que, separados del medio en que habían vivido sus padres, perdían el vínculo con la tierra y se desplazaban a las grandes ciudades, donde sufrían marginación, pobreza y represión política. Esta población joven excedentaria, excluida de los centros de poder y las instituciones e incluida, sin embargo, en el imaginario global, nutrió primero la insurgencia islamista y luego el descontento popular. En los países del Golfo esa clase no existe; los marginados, los trabajadores y los parados son todos extranjeros, inmigrantes no-ciudadanos que carecen de las mínimas condiciones organizativas y subjetivas -y de un objetivo común- para la revuelta.

### **El caso egipcio**

Cuando las primeras noticias de la revolución tunecina llegaron a Egipto, el país gobernado por Hosni Mubarak estaba viviendo una doble crisis. Por un lado, sin duda, una crisis económica endémica que no había dejado de agravarse desde el arranque de los años 90, tras los primeros acuerdos firmados con el FMI y las medidas liberalizadoras en cadena -en traca- que, mientras abrían aún más la economía a las inversiones extranjeras y a los oligarquías locales, empobrecían de manera creciente al resto de la población. En el umbral del nuevo milenio, el 20% de la población concentraba en sus manos el 80% de la riqueza. El número de personas que vivía con menos de dos dólares diarios había aumentado hasta el 44% y el de los que vivían en la miseria absoluta (con un dólar o menos al día) hasta el 25,2%. “En 2011”, escribe Marc Almodóvar, “más de quince millones de egipcios vivían con menos de dos dólares al día mientras ocho hombres de negocios controlaban un patrimonio superior a los dieciocho mil millones de dólares”<sup>1</sup>. El hacinamiento en barrios de chabolas de al menos 12 millones de personas, la dificultad o imposibilidad de acceso a servicios sanitarios (con más de medio millón de afectados de hepatitis), la dependencia de la cartilla de racionamiento (hasta 40 millones de personas), el paro creciente y la inflación, agravada por la crisis alimentaria de 2008, convertían Egipto, desde hacía al menos dos décadas, en uno de los primeros candidatos mundiales a la revuelta social, una revuelta sólo contenida en este caso por las redes de solidaridad para-estatal, de carácter religioso o “étnico” (el caso, por ejemplo, de los nubios), que fungían como redistribuidores de riqueza (de pobreza) y lenitivos sociales. Como consecuencia de este deterioro de las condiciones económicas y del aumento de las desigualdades, los sectores más comprometidos o mejor integrados en las fuerzas productivas del país llevaban años expresando su malestar de manera más o menos organizada. Este es el caso, por ejemplo, de las huelgas del sector textil en 2008, en la zona de Mahala Kubra, en el



delta del Nilo, movilizaciones que muchos han descrito como una verdadera “insurrección obrera”.

La otra crisis era interior al régimen. Las medidas liberalizadoras apoyadas por Moubarak promovieron una nueva clase empresarial que, a principios del nuevo milenio, comenzó a amenazar a la “vieja guardia” enquistada en los puntos neurálgicos de la economía estatal; es decir, a la burguesía militar que llevaba décadas succionando riqueza a través de las compañías y empresas “nacionales”. Como miembro privilegiado de esta nueva casta empresarial, el propio hijo del rais, Gamal Moubarak, fue elevado a tareas de responsabilidad, nombrado en 2002 “secretario general” del Partido nacional Democrático -cargo creado expresamente para él e investido de enormes competencias políticas- y evocado en público como futuro “sucesor”. Dos años más tarde, en 2004, en el marco de este forcejeo sordo entre clanes, Moubarak nombró por primera vez un primer ministro, Ahmed Nazif, no perteneciente a la vieja guardia y de orientación económica abiertamente liberal. Ya entonces, un buen conocedor de la realidad egipcia hablaba de una “escisión del régimen”, escisión que se expresó en las elecciones legislativas de 2005, donde esta pugna subterránea -más que el maquillaje democratizador exigido por los EEUU tras la invasión de Iraq- habría permitido a los candidatos “independientes” de los Hermanos Musulmanes obtener 88 escaños; la respuesta de Moubarak fue en todo caso, fulminante: “por un lado” escribía Javier Barreda en 2005, “ha remodelado el gobierno, aumentando el número de empresarios, y hombres de Gamal en él, y al mismo tiempo renovando al ministro del Interior que dirigió la represión en los comicios; por otro lado, ha relegado aun más a los grandes dinosaurios del partido a posiciones subalternas, y elevado a su hijo al segundo puesto de responsabilidad en él”<sup>2</sup>. Como se sabe, gran parte del malestar de la población frente a las desigualdades económicas y la corrupción creciente se centraron en la figura de Gamal Moubarak y en la nueva clase empresarial protegida por su padre, malestar que sin duda coincidía con el de un sector del ejército que se sentía desplazado por la nueva política del presidente. Nadie puede poner en duda que sin ese malestar popular jamás habría prendido en Tahrir la chispa tunecina que derrocó a Moubarak el 11 de febrero de 2011; pero cabe legítimamente preguntarse si ese malestar habría alcanzado su primer objetivo -el derrocamiento del dictador- sin el malestar de un sector importante de la cúpula del ejército.

En este marco de deterioro económico social y de división interna en el corazón del régimen, la primera década del milenio va a registrar movimientos políticos importantes -mientras el terrorismo islamista cede terreno. Hemos citado ya las huelgas del sector textil, pero igualmente la sociedad civil y los partidos políticos, legales, semilegales o ilegales, comienzan a moverse. En 2004, al hilo de la crisis de Iraq y con la Palestina ocupada siempre al fondo, nace Kifaya (Basta), una iniciativa de clases medias intelectuales (abogados, periodistas, médicos) que consigue movilizar en las calles a un número sin precedentes de egipcios malhumorados y descontentos. Casi al

mismo tiempo siete partidos autorizados de la oposición forman la Alianza Nacional y casi inmediatamente, al igual que en Siria o Túnez, fragua una variopinta coalición llamada Campaña Popular por el Cambio, que incluye fuerzas hasta entonces enfrentadas: los Hermanos Musulmanes, el Partido Comunista, los nasseristas de Al-Karama (Dignidad), los liberales de Al-Ghad (El Mañana), junto a organizaciones de DDHH y otras ONGs. Para completar el cuadro de las fuerzas que a partir de enero de 2011 se disputarán la plaza de Tahrir, hay que añadir al Movimiento 6 de Abril, un movimiento juvenil de izquierdas que nace en 2008 y cuyo nombre alude precisamente a la convocatoria ese año de la huelga obrera de Mahalla Kubra<sup>3</sup>.

En todo caso, la fuerza mejor organizada, la más antigua y la que más apoyo popular recibía seguía siendo los Hermanos Musulmanes, una organización no legal que ha jugado un papel contradictorio y a menudo funcional como oposición al régimen. Fundada en 1928 por Hassan el-Banna, un profesor de Ismailiya que vinculaba la renovación del islam a la lucha anticolonial y que fue asesinado en 1948 por la monarquía pro-inglesa de El Cairo, la larga historia de la Hermandad alterna períodos de lucha armada con otros de acomodación o negociación, según los avatares de las políticas del régimen. En 1952 la Hermandad apoyó el golpe de Estado de Nasser, quien pasó enseguida, sin embargo, a ilegalizarlos, perseguirlos y arrinconarlos. Desde entonces han sufrido períodos de gran represión junto a otros en los que -bajo Sadat o Mubarak- los han utilizado, sin legalizarlos jamás, contra otras fuerzas que coyunturalmente el poder juzgaba más peligrosas. En todo caso, y si es verdad que los grupos yihadistas violentos son escisiones suyas (la Yihad egipcia o al-Gamaat al-islamiya, inspiradas en el pensamiento de Sayyed Qutb), la dirección de los HHMM abandonó la violencia en 1970 y desde entonces y hasta enero de 2011 combinó la acción social con la participación política más o menos tolerada. Para el régimen egipcio, los Hermanos Musulmanes siempre han encarnado a su más íntimo enemigo: un enemigo real, sin duda, pero también funcional tanto en términos de legitimidad exterior como de regulación de las relaciones de fuerzas internas. Es este pragmatismo el que explica que se mantuvieran a una prudente distancia de las primeras manifestaciones en Tahrir el 25, 26 y 27 de enero de 2011, cuya convocatoria no apoyaron oficialmente, y que la víspera del 11 de febrero, fecha del derrocamiento de Mubarak, se mostrasen dispuestos a negociar con el ejército. Este pragmatismo explica también la ingenuidad suicida -y contrarrevolucionaria- que llevó al presidente Mursi a pensar, tras su victoria electoral, que había que hacer concesiones al ejército que podía derrocarlo y no al pueblo que podía sostenerlo.

### **Del derrocamiento de Mubarak al derrocamiento de Mursi**

Repasemos rápidamente las estaciones. Entre el 25 de enero y el 11 de febrero de 2011, una de las más grandes movilizaciones de la historia (Azmi Bichara calcula que participa en ella el 20% de la población egipcia), cuyo centro visible y ya mítico es

la plaza de Tahrir, conduce -con miles de muertos y heridos en las calles- a la dimisión de Moubarak y a la asunción del “poder provisional” por parte del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas, que acepta “una hoja de ruta” hacia la democracia. Tras el referendun de marzo de 2011 que consagra la agenda y hasta el 28 de noviembre de ese mismo año, fecha acordada para las elecciones legislativas, el pulso entre la plaza y el ejército continúa: la destitución del gobierno, la disolución del corrupto partido de Mubarak (PND) y la confiscación de sus activos, la destitución de miles de funcionarios corruptos de los consejos locales, el juicio a altos dirigentes y ministros del depuesto régimen, la apertura del cruce de Rafah para aliviar el bloqueo contra Gaza, el propio establecimiento de fechas definitivas para las elecciones, así como la reforma de las leyes electorales para poder incluir listas de partidos y candidatos individuales, todas éstas y otras muchas demandas son concedidas por el CSFA a regañadientes, bajo presión popular, y siempre con un alto coste de víctimas. Durante estos meses -no hay que olvidarlo- el ejército y la policía siguen con sus habituales prácticas represivas: 12.000 juicios militares a manifestantes, abusos sexuales en cuarteles y comisarías, torturas rutinarias y represión brutal de las protestas y movilizaciones<sup>4</sup>. Los Hermanos Musulmanes, que se saben virtuales vencedores en los futuros comicios, mantienen una posición ambigua, más preocupados de acelerar los trámites administrativos que de apoyar los cambios estructurales que exige Tahrir. Por su parte los partidos laicos y liberales, que se saben perdedores, reclaman una nueva constitución antes de las elecciones y presionan al ejército para que limite las competencias del futuro Parlamento.

Las elecciones legislativas, celebradas entre el 28 de noviembre de 2011 y el 11 de enero de 2012, dan una abrumadora mayoría a los Hermanos Musulmanes y a los otras fuerzas islamistas (en torno al 75%) mientras que los partidos laicos tienen que conformarse con el 22% (en cuanto a los fulul del antiguo régimen sólo obtienen el 3%). En términos políticos, el resultado apenas cuenta, pues el poder continúa en manos del ejército, cuyo CSFA se reserva todas las competencias, incluida la de formar gobierno. En términos sociales, el efecto más evidente, en todo caso, es la fractura “ideológica” de una población que en enero y febrero de 2011 había fundido todas sus diferencias en Tahrir para “derrocar al régimen”. Esta fractura hace pivotar el enfrentamiento en torno al conflicto laicismo/islamismo con el ejército como árbitro interesado y Tahrir como medio de presión y de “administración” de las conquistas populares y de las ambiciones partidistas. Y como expresión, naturalmente, de los sectores que consideraban manifiestamente incompleta la revolución del 25 de Enero. El analista egipcio Essam Al-Amin resumía la situación de esta manera: “hace tiempo ya, desde el referéndum de marzo de 2011, que se esfumaron los días de la unidad revolucionaria. Desde esa fatídica fecha, hay claramente tres fuerzas políticas principales dentro de la sociedad, a saber, el CSFA, los partidos políticos islámicos dirigidos por los Hermanos Musulmanes (HM) y las fuerzas revolucionarias

mayoritariamente laicas, entre las que se incluyen los grupos de jóvenes, los nacionalistas, los liberales y los izquierdistas. Siempre que dos de esos grupos distintos se unen es normalmente a expensas de un tercero”<sup>5</sup>.

A partir de ese momento, de cualquier manera, los Hermanos Musulmanes juegan a un tira y afloja con el CSFA. Seguros de su apoyo electoral, tratan de imponer un Consejo Constitucional con mayoría islamista, lo que genera protestas de los grupos laicos, mientras se opone a aceptar los privilegios constitucionales del ejército en términos de control del presupuesto y de inmunidad. Cuando a finales de marzo la Hermandad incumple su promesa de no presentarse a las presidenciales y nombra candidato a Khairat El-Shater, adjunto del Guía Supremo y carismático hombre de negocios, el ejército reacciona ilegalizando por vía jurídica la candidatura y presentando su propio candidato: el ex-primer ministro de Mubarak Ahmed Shafik. Este pulso conduce a la presentación in extremis de Mohamed Mursi, oscuro dirigente islamista poco mediático, y a la disolución del Parlamento por parte del Tribunal Constitucional tras conocerse los resultados de la primera vuelta de las presidenciales, celebradas el 23 y 24 de mayo de 2012. En la segunda vuelta, el 16 y 17 de junio, Mursi derrota a Shafik por un escaso margen y con cinco millones de votos menos que en las legislativas del año anterior, convirtiéndose así en el primer presidente civil de la historia de Egipto. El 18 de junio, en un artículo publicado en su blog, el conocido analista Alain Gresh diagnostica certeramente: victoria electoral y derrota política de los Hermanos Musulmanes<sup>6</sup>.

A partir de ese momento y hasta su derrocamiento por el golpe de Estado del 3 de julio, Mohamed Mursi va a intentar la cuadratura del círculo: imponerse al ejército sin profundizar la revolución. Mientras trata de desactivar la plaza, e incluso acepta la represión de las fuerzas policiales, busca hacer retroceder al CSFA sin romper con él. Una semana después de jurar el cargo, Mursi emite un decreto para restablecer el Parlamento, pero es invalidado en menos de 48 horas por el Tribunal Superior. Nombra un gabinete de 30 ministros, encabezado por Hisham Qandil, en el que sólo hay cinco miembros de los Hermanos Musulmanes, pero que, tras el fracaso de las negociaciones con las fuerzas laicas, tiene un perfil muy poco integrador y revolucionario. En agosto, trata de ir más lejos y reestructura la cúpula militar, jubila a Tantawi como jefe del ejército y ministro de defensa nombrando en su lugar al futuro golpista Abdelfatah Al-Sisi. Pero en ese momento la fractura social es ya irreconciliable y, cuando el 21 de noviembre Mursi emite un decreto mediante el que se otorga poderes especiales durante una semana para poder convocar el referéndum constitucional sin que los jueces intervengan, la reacción de toda la oposición -de izquierdas, de derechas y restos del antiguo régimen- es unánime. En los días siguientes arden hasta 28 sedes de los Hermanos Musulmanes y el 5 de diciembre, pocos días antes del referéndum, se producen enfrentamientos sangrientos entre partidarios y detractores del presidente

Mursi. La nueva constitución es aprobada por un estrecho margen y una baja participación.

El 25 de enero de 2013, cuando se cumplen dos años del comienzo de la revolución, los choques en la plaza anuncian ya el desenlace que cinco meses después llevarán al derrocamiento militar de Mursi. Se puede ser más o menos severo con los Hermanos Musulmanes, pero nadie puede negar sus errores. Se puede ser más o menos comprensivo con la oposición, pero nadie puede negar que se dejó utilizar -cuando no colaboró activamente- en una estrategia golpista de manual en la que a la criminalización mediática de los islamistas se añadieron, como técnicas bien conocidas, la violencia, el desabastecimiento de productos básicos, los cortes de luz y la intimidación de las minorías<sup>7</sup>.

El 30 de junio, una gigantesca, legítima y manipulada protesta en Tahrir - pactada entre el grupo Tamarrud (Rebelión) y el ejército y seguida en streaming desde el aire por helicópteros militares- desembocó el 3 de julio en la intervención del general Sisi, la detención y desaparición del presidente Mursi y la toma del poder, sin mediaciones institucionales, por el CSFA. El golpe de Estado fue apoyado por Tamarrud, por el Partido Comunista, por el Frente Nacional de Salvación (del que formaban parte la derecha y la izquierda, incluidos Al-Baredei y el nasserista Hamdin Sabahi), por Al-Azhar y el mufti, por el papa copto, por los salafistas de Nur y por todos los medios de comunicación (salvo Al-Jazeera, cuyas sedes fueron inmediatamente asaltadas y sus periodistas arrestados).

La brutal represión desencadenada desde el 3 de julio, y que hoy incluye ya a algunos sectores que inicialmente apoyaron el golpe, tuvo su máxima expresión el 14 de agosto, cuando el desalojo de la acampada islamista de Raba Adaweya produjo la mayor matanza de civiles de la historia de Egipto: más de ochocientas personas en pocas horas, muchas de ellas mujeres y niños. Como para dejar claro lo que estaba en juego, una semana después, el 21 de agosto, los tribunales ordenaban la liberación del dictador Hosni Mubarak, y el luminoso proceso abierto el 25 de enero parecía cerrarse sobre sí mismo, atrapando entre sus fauces a todos los que habían creído posible un gobierno civil y democrático en el país del Nilo. Hoy las movilizaciones constantes y la brutal respuesta represiva y judicial -con el resurgir de la violencia terrorista- hacen temer algo más que una simple vuelta al pasado: un conflicto civil de gran envergadura.

### **El golpe egipcio y las revoluciones árabe**

La inesperada irrupción de los pueblos que las convenciones periodísticas llaman Primavera Árabe (olvidando que quiso ser también “primavera amazigh” o “primavera kurda”) abrió una modesta pero luminosa oportunidad en la zona. Yo la llamaría sin lugar a dudas “revolución”. No fue una revolución socialista y no fue dirigida por la izquierda. Tampoco fue una revolución islámica y los islamistas tuvieron

asimismo un papel muy reducido. Pero como fue una revolución democrática, salió a flote la verdadera relación de fuerzas en la zona -reprimida durante décadas- y las elecciones, allí donde las hubo, llevaron al gobierno a los partidos islamistas de la órbita de los Hermanos Musulmanes. Tanto la izquierda de la región, avejentada y estalinista, como los partidos islamistas, que incubaban sueños de califato, cedieron a la presión popular y adoptaron sinceros programas democráticos. Los fulul de la dictadura, a su vez, se reciclaron en demócratas y, desde distintas organizaciones y partidos, en condiciones sin precedentes de libertad de expresión y reunión, comenzaron a trabajar para recobrar el poder.

Un año después de la inmolación de Mohamed Bouazizi, un modelo parecía imponerse de manera irresistible en el nuevo mundo árabe en gestación a partir de las intifadas populares: el que debía llevar al poder, por la vía democrática, a los islamistas “moderados” asociados a la constelación de los Hermanos Musulmanes. Así ocurrió en Túnez con Nahda y en Egipto con Justicia y Libertad; en Libia no ganaron las elecciones, pero pasaron a constituir la fuerza mejor articulada y la más influyente; en Siria, dominaban también la oposición en el exilio hasta hace pocos meses. Este modelo era apoyado desde Qatar, enano aupado en enormes zancos financieros, y sobre todo desde Turquía, país gobernado por el islamista AKP al que la “primavera árabe” brindó la oportunidad de restablecer su influencia regional histórica, en un viraje político que muchos analistas llamaron “neo-otomano”. La imparable ascensión de los Hermanos Musulmanes -en cierto sentido, normalización de una relación de fuerzas reprimida o clandestina- explica sin duda la ruptura de Erdogan con Siria, con el que mantenía excelentes relaciones de vecindad, pero también, por ejemplo, el cambio de posición de la organización palestina Hamas, rama local de los HHMM, frente al régimen de Bachar Al-Assad, del que era aliado y huésped hasta hace dos años.

Pues bien, este modelo, que prometía “democratizar” y estabilizar la región sin rupturas económicas y que contaba por eso con el apoyo refunfuñón de las potencias occidentales, reveló muy pronto sus limitaciones bajo la triple presión de la crisis económica global, los conflictos geo-estratégicos y la movilización popular. El modelo turco-qatarí o, lo que es lo mismo, el modelo de los Hermanos Musulmanes se ha desmoronado muy rápidamente, pero no como resultado del fracaso del partido AKP gobernante en Turquía (que acaba de vencer las elecciones municipales) sino de la intervención contrarrevolucionaria de fuerzas internas y externas, a menudo enfrentadas entre sí, en el contexto de la región. Esta intervención tiene distintos tiempos y adopta formas muy distintas en los distintos escenarios, a medida que las protestas se fueron extendiendo o estancando. La resolución 1971 de la ONU en febrero de 2011 y la posterior intervención de la OTAN a favor y en contra de la revuelta libia fue posible porque Gadafi estaba completamente aislado y generó por eso pocas fracturas ideológicas y geoestratégicas entre las potencias y entre los propios partidos locales. El caso de Siria es bien diferente. Por su centralidad estratégica en el eje llamado “chíi” o



de “resistencia” (la secuencia Irán-Iraq-Siria-Hizbullah), la legítima revuelta contra la dictadura dinástica de los Assad, que comenzó en Deraa en marzo de 2011, se transformó en pocos meses en una batalla multinacional con intervención indirecta o directa de distintos países: Qatar, Turquía, Arabia Saudí y, menos, la UE y los EEUU del lado de los rebeldes; y Rusia, Irán, Iraq y Hizbullah del lado del gobierno. Como claro indicio de la nueva complejidad y de la invalidez de los análisis “campistas”, hay que recordar que sólo los aliados de Bachar Al-Assad forman realmente un “bloque”. La diferencia de intereses y de implicación en la trinchera rebelde se revela en la variedad ideológica de las milicias, muchas veces enfrentadas entre sí, que combaten el régimen. En todo caso, la agonía siria, con la recuperación de posiciones sobre el terreno y de legitimidad internacional por parte de la dictadura (tras el acuerdo ruso-estadounidense sobre armas químicas en agosto de 2013 y las conversaciones de Ginebra en enero de 2014) ha cuestionado seriamente el proyecto regional de Erdogan al tiempo que ha dejado casi fuera de juego la revuelta democrática original. El AKP, que abandonó su alianza con Siria creyendo jugar una carta ganadora, se ve hoy directamente amenazado por la “cuestión siria”, que está minando su apoyo interior, sobre todo como consecuencia de la presencia de miles de refugiados, y reduciendo su influencia exterior. Los recientes intercambios de visitas entre Ankara y Teherán prueban que Erdogan se está viendo obligado a revisar su estrategia en Siria y en toda la región.

Pero el modelo turco-qatarí recibió el golpe más duro en Egipto, el 3 de julio de 2013, con el brutal golpe de Estado que derrocó a Mohamed Mursi, dirigente de los Hermanos Musulmanes y primer presidente civil de la historia de Egipto. El ejército egipcio, máximo receptor de ayuda económica de los EEUU y columna vertebral de la economía nacional, garante de los acuerdos de Camp David con Israel, se ha convertido así en el motor de una acelerada reversión del tsunami popular desencadenado en enero de 2011, reversión de la que sólo se ha salvado, por el momento, Túnez, donde se acaba de aprobar la primera constitución democrática del país y del mundo árabe. Hay que aclarar, en todo caso, que EEUU ha tenido muy poco que ver en el golpe egipcio, como tuvo muy poco que ver en el desencadenamiento de las revoluciones. Lo que ha habido en Egipto es un golpe de Estado anti-islamista, como lo hubo en Argelia, o más exactamente anti-HHMM, como lo demuestra la felicidad compartida de Bachar el-Assad y Arabia Saudí, enemigos entre sí, y la ayuda económica ya otorgada por la casa Saud y los Emiratos Árabes. No es un golpe de Estado “de izquierdas” ni “nasserista” ni “nacionalista”. Hay que inscribirlo más bien en la guerra fría sunní contra Qatar y Turquía y está muy lejos, por tanto, de cualquier impulso “democratizador” o -ni siquiera- soberanista. La imagen manipulada -insinuada por los medios egipcios y sus patrocinadores militares- de un Sisi nasserista y nacionalista que recuperaría la “independencia” frente a las intromisiones extranjeras oculta no sólo los miles de muertos que ha producido sino sus vínculos y dependencias con las fuerzas más

reaccionarias del mundo y con Israel. Como bien recordaba el sociólogo Sadri Khiari a los que querían aplicar en Túnez el mismo modelo, no hay ningún “lado bueno” para retroceder hacia la dictadura y el oscurantismo.

La posibilidad de una “normalización democrática” a través de la integración de los islamismos “moderados”, muy real hace sólo un año, se está truncando de la peor manera, a la “argelina”, y hoy sólo se mantiene viva en un pequeño país del norte de África, Túnez, cuya importancia es más bien simbólica. Frente a esa “normalización” esperanzadora se renuevan los viejos ciclos de dictadura-represión-radicalización-criminalización-dictadura que tantas víctimas han costado en esta zona del mundo desde el fin de la segunda guerra mundial.

Particularmente penoso es el hecho de que, tanto en el mundo árabe como en el resto del mundo, un sector de la izquierda invoque el “mal menor” o la “geoestrategia” para apoyar o celebrar la derrota de la “primavera árabe”, que -según ellos- corría el riesgo de llevarnos a un “invierno islamista”. Frente a ese peligro, como en el pasado, cualquier medio estaría permitido. Porque creo que la cuestión que sigue sin resolver una parte de la izquierda es ésta: su islamofobia, idéntica a la de la derecha. A mi juicio, hay sólo dos posibilidades: o se insiste en que el totalitarismo está inscrito en el código genético del islam y entonces se apuesta por una interminable guerra de exterminio (al lado de cualquier aliado coyuntural, ejércitos fascistas como el sirio o el egipcio o fuerzas armadas colonialistas) o se pone a prueba la hipótesis de que también el islam contiene “puntos de ruptura epistemológica” (como diría Al-Jabiri siguiendo a Bachelard y Althusser) y se intenta desplazar hacia la izquierda ese “macizo cultural” sin el cual no puede hacerse ninguna revolución. No creo que haya más alternativas, la verdad. Las dos tienen riesgos, pero me parece evidente que los de la primera son mucho mayores. Nos guste o no, el derrocamiento militar de Mursi, y el descarrilamiento de la frágil y contradictoria “transición democrática” en Egipto apuesta claramente por “la guerra interminable de exterminio”. Es la solución clásica que tan nefastos resultados ha dado. La Historia ya emitió su juicio sobre esa tentativa. Y los pueblos, con los islamistas que forman parte de él, se rebelaron en 2011 contra ella.

### **Bibliografía**

- Achcar, Gilbert, *Le peuple veut*, Sindbad Actes Sud 2013
- Almodóvar, Marc. *Egipto tras la barricada*, Editorial Virus 2013.
- Alvarez Ossorio, Ignacio y Gutiérrez de Terán (editores), *Informe sobre las revueltas árabes*
- Naïr, Sami, *¿Por qué se rebelan? Revoluciones y contrarrevoluciones en el mundo árabe*, Clave Intelectual 2013
- Rodríguez, Olga, *Yo muero hoy, las revueltas en el mundo árabe*, Debate 2012.